

*Análisis de una política económica alternativa**

Cristóbal MONTORO ROMERO
*Catedrático de Economía Aplicada
Diputado del Partido Popular*

Ante todo, deseo agradecer la invitación cursada en mi persona al Partido Popular para exponer nuestra interpretación sobre la situación de la economía española y nuestra oferta de política económica.

Estructuraré mi intervención en cuatro partes, a efectos de conseguir una mejor ordenación de los argumentos.

- *En un primer término, describiré someramente la situación política española, que condiciona la evolución de la economía.*
- *En segundo lugar, me referiré a la naturaleza de la crisis económica, a la identificación de los problemas que afrontamos en España.*
- *A continuación, explicaré la actitud del PP en la actual conyuntura política.*
- *Por último, describiré cuál es el contenido de la política económica que propugna el Partido Popular, una política diferente de la practicada por el Gobierno socialista.*

En cuanto a la situación política, hemos de decir que lamentablemente *las Elecciones Generales del pasado 6 de junio no han servido para encauzar la solución de los problemas económicos, que ya por entonces se habían manifestado con virulencia.*

* *Texto de la ponencia desarrollada en las jornadas organizadas por The Economist (31 de enero - 1 de febrero 1994) y en la conferencia impartida en la E. U. de Estudios Empresariales (UCM) dentro del Ciclo de Conferencias y Seminarios 1993/94.*

La actitud del Partido Socialista impidió que las elecciones se convirtieran en un período de reflexión, en el que la sociedad española conociera mejor sus problemas y meditara sobre el futuro que aspira a construir.

La victoria del Partido Socialista, el 6 de junio, se basó en los siguientes factores:

- *Ocultar la gravedad de la crisis económica, que según ellos se superaría por una pronta recuperación.*
- *Amedrantar a parte de la sociedad con la amenaza de la vuelta de la «derecha», que recortaría las prestaciones sociales.*
- *Ofrecer un discurso electoral de claro sesgo izquierdista, aun a sabiendas que no era viable con la política económica exigida por la crisis.*

Celebradas las elecciones, no quedó más remedio que reconocer la gravedad de la crisis, algunas de cuyas manifestaciones, como el descenso del PIB o el déficit público, habían sido ocultadas.

Los primeros meses de gobierno se han malgastado sin poner en marcha una política que sirviera de terapia de choque para combatir eficazmente la crisis económica. No utilizar el «período de gracia» con que cuenta todo nuevo Gobierno, equivale a despilfarrar el capital político más importante, el máspreciado de que dispone cualquier gobernante para enfrentarse a una grave crisis. Una pérdida por lo demás irrecuperable.

Los Presupuestos Generales del Estado para 1994 fueron la máxima expresión de una política esencialmente continuista, afectada por una considerable pérdida de credibilidad. De hecho, los Presupuestos no han sido capaces de modificar las expectativas de los agentes económicos, dentro y fuera de nuestras fronteras.

La pasividad con la que el Gobierno socialista ha afrontado la crisis económica se explica por la combinación de los factores siguientes:

En primer lugar, *no pudo explicar a la sociedad*, de una forma veraz y completa, la gravedad de la crisis atravesada, toda vez que hubo una ocultación en las pasadas elecciones. Ha faltado el reconocimiento explícito del Presidente González, que hubiera servido para propiciar una mentalidad en la sociedad más receptora de los cambios necesarios en política económica.

En segundo lugar, hay que citar el *enfrentamiento interno en el Partido Socialista*; un enfrentamiento que no obedece sólo a la lucha por el poder en el seno del partido. Han entrado en colisión dos, o incluso tres, formas diferentes de concebir la acción política ante una crisis económica.

La tensión del Partido Socialista se traslada inevitablemente al Gobierno, en cuyo seno se advierten dimensiones considerables.

Además, desde el Gobierno, encabezado por su Presidente, se está *lanzando el proyecto de cambio político*, en el que se abandona parte del bagaje in-

telectual de la socialdemocracia. Nada hay que objetar a que cada cual intente encontrar su cauce político de conexión con la sociedad. Lo que sí es más censurable es que se intente una transición ideológica desde una posición de Gobierno en un país en crisis. El tránsito —hacia no se sabe dónde— quita firmeza a la acción de Gobierno, lo que equivale a restar efectividad a la política económica.

Otro factor adicional explicativo de la pasividad del Gobierno ante la crisis se encuentra en *su relativa debilidad en el Parlamento*, que le ha llevado a buscar el apoyo de otras minorías, los nacionalistas, que no han antepuesto el objetivo de luchar contra la crisis económica a sus intereses localistas, a pesar de sus esfuerzos por explicar a la opinión pública lo contrario.

Por último, *el Gobierno ha pretendido utilizar la figura del pacto social como una forma de diluir responsabilidades en su política económica*. Al pretender involucrar a los agentes sociales en decisiones que sólo a él le correspondían, se han perdido meses en una negociación abocada al fracaso. Lejos de despejar dudas, en la misma se han generado tensiones conducentes a la huelga general del pasado 27 de enero. Ésta ha sido expresión del conflicto existente en la izquierda española, que en parte se siente desamparada por un Gobierno infiel a los llamamientos que usó en las pasadas Elecciones Generales.

La conclusión de esta primera parte de mi análisis es relativamente pesimista: *la situación del partido gubernamental y la clase de apoyos parlamentarios que recibe definen un panorama poco o nada propicio para resolver la crisis económica*.

En otras palabras, el Gobierno socialista se encuentra debilitado y confuso a pocos meses de las elecciones como resultado de sus conflictos internos, de la presión de los nacionalistas y de su falta de convicción íntima para afrontar la solución de los problemas que tiene delante.

Antes de pasar a explicar las propuestas económicas del Partido Popular, es obligado que introduzca algunas precisiones sobre la naturaleza de los problemas que padece la economía española.

En primer término, *la crisis económica obedece a razones estructurales*, de modo que no se trata tan sólo de un bache depresivo, del que se saldrá con paciencia.

La crisis de la economía española responde *al final del modelo de crecimiento vigente en los ochenta*, caracterizado por una explosión de la demanda interna, ante lo que la oferta de la economía no pudo reaccionar. Ello provocó, inevitablemente, el resurgir de los viejos fantasmas de la economía española, la inflación y el déficit exterior, que se convirtieron en obstáculos considerables para el crecimiento. Entre tanto, el déficit del sector público confirmó su carácter estructural, toda vez que la holgada recaudación impositiva facilitada por el crecimiento económico se gastó con gran «alegría» con la excusa de satisfacer demandas sociales o mejorar infraestructuras, algunas ligadas a los eventos del 92.

El resultado ha sido *un ejercicio de 1993* que puede calificarse como *el peor de nuestra historia reciente*. En él, el PIB habría descendido más de un 1% en volumen, la inversión lo habría hecho más de un 10%, la destrucción de empleo del 4,5%, elevando la tasa de paro a cerca del 24% de la población activa a finales de año, y la caída de la producción industrial habría sido cerca del 5%. En su conjunto, la demanda interna, responsable de la anterior fase de crecimiento, se habría desplomado en torno al 3,5%, sin conseguir por ello que los desequilibrios básicos se redujeran todo lo deseable.

Por un lado, *la inflación* parece haber encontrado un «suelo» en su caída; «suelo» establecido por la permanencia de los factores estructurales, como el aislamiento de la competencia del sector servicios o el empuje incesante del gasto público. En cuanto al sector exterior, a pesar de compensar en parte la caída de la demanda interna, sigue registrando un déficit por cuenta corriente excesivo (más de un 2% del PIB), cuya difícil financiación obliga a mantener elevados los tipos de interés.

A los desequilibrios anteriores se añade la apertura de un excesivo déficit público, que en 1993 pudo situarse cerca del 8% del PIB a resultas del rápido avance del gasto (más de dos puntos porcentuales de PIB) y de una cierta reducción de la presión fiscal provocada por el desfallecimiento de la actividad productiva.

El aumento de la deuda pública se ha convertido en uno de los mayores problemas de la economía española. Puede hablarse con propiedad de «insostenibilidad» de la misma, sustanciada por el hecho de que los tipos de interés reales sean superiores al crecimiento del PIB nominal. Además de perder (en 1994) el único criterio de convergencia nominal de Maastricht, la insostenibilidad de la deuda constituye una amenaza para la reactivación económica.

La explicación de que la crisis de la economía española no es sino una edición de la crisis europea, que se superará inmediatamente con aquélla, es otra simplificación excesiva, que como tal debe descartarse.

Ciertamente, el ciclo de la economía española sigue al europeo, pero éste no explica ni que nuestros problemas sean superiores ni, desde luego, la pasividad de la política económica. La dimensión internacional, más bien europea, de la crisis muestra que ésta es consecuencia de los desajustes de las economías a las nuevas condiciones que se han dado –apertura exterior, fracaso del socialismo real, falta de flexibilidad de sectores y actividades y excesivo tamaño de los sectores públicos–. En la mayoría de los países de nuestro entorno existe una reacción en forma de políticas económicas reductoras de la fiscalidad, redefinidas de prestaciones sociales, aplicadoras de una actividad política de privatizaciones, desreguladoras de actividades económicas...

La crisis económica española es más grave que la de la mayoría de los países europeos, como revelan las cifras clave: caída de la producción y de la inversión, alta tasa de desempleo, destrucción del tejido industrial elevada in-

flación (en términos comparados), uno de los déficit comerciales mayores del mundo, veloz aumento de la deuda pública...

Vale la pena identificar las causas explicativas de la desfavorable evolución de la economía española, puesto que las propuestas de política económica del Partido Popular pretende corregirlas.

De forma somera, las causas principales de nuestra profunda crisis económica son las siguientes:

— *Un aumento de salarios superior al que registraban los países del entorno, más avanzados. España perdía competitividad internacional, y con ello una de las ventajas que más había atraído a la inversión extranjera directa en el pasado inmediato.*

El rápido aumento de los costes salariales mermaría la generación de beneficios empresariales, y así la capacidad de autofinanciar nuevas inversiones.

El incremento salarial en una economía con alta tasa de desempleo fue posible gracias a la rigidez del mercado de trabajo y al efecto de un tipo de cambio de la peseta relativamente sobreapreciado.

— *La segunda causa de que la crisis económica fuera peor que la del resto de las naciones europeas radica en la actitud excesivamente consumista que se registró durante algunos años, propiciando un espectacular avance de las importaciones y, a la postre, un aumento del déficit exterior —y de las necesidades de financiación de la economía, que revelaba la insuficiencia del ahorro interna. Ello motivó que para garantizar la entrada de capitales hubiera de recurrir a altos tipos de interés —en términos comparativos— que resultaron desestimulantes para la inversión, la producción industrial y finalmente para el consumo.*

— *La tercera gran causa de la crisis económica «diferencial» de la economía española se encuentra en el error de planteamiento de la política económica.*

Lo más grave es la pérdida de credibilidad de la política económica ante los agentes sociales, lo que acaba haciéndola ineficaz.

Por un lado, la política de regulación de la demanda ha consistido en la aplicación de un «mix» de política presupuestaria expansiva —política monetaria restrictiva que ha resultado sumamente perjudicial para la correcta evolución de la economía.

La incorporación de la peseta al Sistema Monetario Europeo, en junio de 1984, debería haber servido para disciplinar las finanzas públicas y los costes de producción de las empresas (principalmente salarios). Lejos de conseguir ese efecto, una peseta sobrevalorada durante largo tiempo ha servido de co-

bertura para aumentos de gasto público y de salarios, que en otras circunstancias seguramente no se habría producido.

El resultado de esa política ha sido extraordinariamente perjudicial para la inversión empresarial, para la producción de la industria y para el empleo y el consumo.

Además, la política económica no tuvo la resolución de acometer las grandes reformas estructurales que eran necesarias para la modernización de nuestro aparato productivo. Los Gobiernos socialistas anunciaron reiteradamente una serie de reformas que fueron incapaces de llevar adelante.

En medio de una crisis económica de gran envergadura y a pocos meses de la celebración de las Elecciones Generales, la actitud del Partido Popular no podía ser otra que el ejercicio de una oposición responsable, que consta de los siguientes elementos:

En primer lugar, hemos procurado que nuestra labor de oposición no agrave una crisis de por sí muy severa. Esta actitud explica nuestra posición ante casos como el de Banesto, que ha amenazado con desencadenar una crisis de confianza en el sistema financiero.

En segundo lugar, hemos pretendido hacer ver al gobierno que es necesario un cambio drástico de política económica que sin —una nueva política económica— no se producirá una salida de la crisis económica.

El Partido Popular no es sólo una fuerza de oposición: *somos la única alternativa de Gobierno*. Ello nos hace anteponer los objetivos generales de la nación, la política de Estado a cualquier otro planteamiento más «teóricamente» partidista.

Que no se malentienda nuestra actitud como un apoyo al Gobierno socialista. *Nuestro empeño es provocar un cambio global, completo, de política económica*. Partimos del convencimiento de que sin ese cambio de política económica, la gestión de la crisis económica fracasará.

La crisis de la economía española es una crisis de modelo. No podemos volver a repetir la experiencia de los años ochenta: ello provocaría un repunte de la inflación y del déficit exterior que lo haría fracasar prontamente. *Hay que alumbrar un nuevo modelo de crecimiento económico*, que constituye el proyecto, el objetivo final de la política económica propuesta por el Partido Popular.

Se trata de un modelo de crecimiento basado en la exportación y la inversión, y fundamentalmente creador de empleo. En suma, pretendemos un modelo de desarrollo que aumente la competitividad internacional de la economía española; una competitividad cuya falta sigue constituyendo nuestro mayor problema.

Nuestra oferta de política económica combina equilibradamente la política de demanda con la potenciación de la oferta de la economía. En diciembre pasado, presentamos una oferta de medidas de choque estimulantes, por la vía fiscal, de la demanda de consumo y de inversión, al tiempo respetuosas

con la necesidad de reducir el déficit público. En estos días estamos completando una segunda entrega de medidas de reforma estructural, cuya aplicación provocaría la flexibilización de nuestro aparato productivo, tanto en el ámbito del sector privado como del público.

El proyecto de política económica del Partido Popular es *perfectamente comparable* a los que se aplican en los países de nuestro entorno.

En primer lugar, aspiramos a reducir la tensión existente entre la política presupuestaria y la política monetaria. La reactivación de la economía requiere tipos de interés suficientemente bajos, así como nuestra adscripción a la Unión Monetaria demanda estabilidad de la cotización de la peseta.

Para conseguir un efectivo abaratamiento de los tipos de interés, hay que reducir significativamente las expectativas de inflación, recortar el déficit público (y la deuda pública) y promover el aumento del ahorro de todos los agentes económicos (incluido el sector público).

El cambio de signo de los Presupuestos Generales del Estado es una de las piezas maestras del cambio que propugnamos. Obviamente, *se trata de reducir el déficit público sin aumentar la presión fiscal (puesto que restaría competitividad) y sin renunciar a un elevado gasto público en inversiones (infraestructuras)*. Lo anterior significa hacer descansar el ajuste presupuestario sobre el gasto corriente. Algo que no será posible sin llevar a cabo una profunda reforma del sector público que reorganice su funcionamiento, redefina su ámbito de actuación y revise sus fuentes de financiación. En el fondo, estamos hablando de un replanteamiento íntegro del Estado de bienestar, en el que salga ganando la eficiencia en la provisión de servicios públicos para la sociedad y en el que se limite su ámbito de acción a lo estrictamente financiable.

La realización de *una completa reforma tributaria*, regida por los principios de neutralidad, sencillez y equidad (horizontal), debería alcanzar a todas las grandes figuras impositivas. La intención es introducir los estímulos pertinentes al ahorro, a la inversión y a la creación de empleo. A este último fin, es obligado reducir las cotizaciones a la Seguridad Social, intercambiándolas por otros impuestos.

La reforma del sector público se completa con una adecuada modificación del «estatus» de la empresa pública. En este terreno, nuestra propuesta es la realización de una amplia *estrategia privatizadora de empresas públicas* que, sin las limitaciones ideológicas de los socialistas, aumente la eficiencia asignativa del conjunto del sistema productivo y facilite los recursos necesarios para reducir la participación de la deuda pública en el PIB.

La estrategia de cambios necesita *una reforma del mercado de trabajo*, mejor ordenada que la proyectada por el Gobierno (por ejemplo, en materias de reforma del Inem, Formación Profesional —políticas activas de empleo— y reforma del seguro de desempleo).

Por último, nuestro proyecto de política económica pretende *reducir los costes de producción empresarial* mediante la liberación y desregulación de

sectores clave para el conjunto de la economía como son las telecomunicaciones, los transportes y la energía.

A todo lo anterior se sumaría una *política industrial*, de carácter fundamentalmente horizontal, que apoye decididamente, a través de los oportunos incentivos fiscales, la inversión en intangibles (la calidad, formación, marca, diseño), los gastos en I+D, la expansión internacional de nuestras empresas y la reconversión de sectores industriales en declive.

La creación de empleo depende de la aparición de una nueva generación de empresas en España, a cuyo fin hay que facilitar todos los medios. La supresión de barreras fiscales, legales y administrativas para la pequeña y mediana empresa constituye otro de los motivos fundamentales de nuestro proyecto de reforma de política económica.

La crisis de la economía española es fundamentalmente una *crisis de confianza* de los agentes económicos, consumidores e inversores, que recelan acerca de su futuro inmediato:

En las circunstancias presentes, hay razones sobradas para la desconfianza general. *El ejercicio de 1994 no será el año de la recuperación* decidida de la economía. El crecimiento económico será escaso, aportado fundamentalmente por el sector exterior; alejado, en definitiva, de las previsiones del Gobierno (1,3%), que ya han sido revisadas una vez a la baja. Un crecimiento desde luego insuficiente para evitar que el paro continúe aumentando y el bienestar de la mayoría de los españoles se deteriore. Ciertamente, se suavizará la caída de actividad tras el dramático ajuste de 1993. Pero probablemente permaneceremos en *el fondo de una depresión* que se prolongará en tanto no haya una reacción acorde de política económica.

Estamos convencidos de que la capacidad de desarrollo acerca de la capacidad de *desarrollo* futuro de la economía española es alta. Nuestra economía sigue teniendo un gran potencial de crecimiento en los recursos productivos infrautilizados actualmente. Para ser capaz de movilizarlos, hay que reconducir y estabilizar la situación política. Hay que *despejar la incógnita política*, hoy convertida en el obstáculo principal para el crecimiento económico y la creación de empleo. En este marco se explica la estrategia de oposición del Partido Popular.

La crisis económica brinda la oportunidad de acometer las reformas estructurales que nuestra economía requiere. Pero la crisis es de tal envergadura, de tal entidad, que *forzará al Gobierno a cambiar de estrategia política ante la apremiante necesidad de dar respuesta satisfactoria a los problemas.*